

Capítulo 25

Tatiana Acevedo Guerrero

“¡EL PUEBLO NO SE RINDE, CARAJO!”: LA LUCHA POR EL AGUA PÚBLICA EN BUENAVENTURA, COLOMBIA

Este capítulo ofrece una breve historia del suministro de agua en Buenaventura, con el fin de demostrar cómo estos antecedentes afectan la forma en que la ciudad ha respondido a la covid-19. En primer lugar, se analizan las deficiencias de la empresa pública regional de agua en la década de 1970 y el proceso de privatización que se inició en la década de 1990 con un contrato de concesión. En segundo lugar, se revisa el desempeño de la empresa privada Hidropacífico entre los años 2002 y 2014. A continuación, el capítulo se focaliza en el surgimiento de un movimiento social en torno al acceso a los servicios públicos y el paro cívico de Buenaventura del año 2017. La última sección está dedicada a las estrategias con las que las comunidades enfrentan la emergencia de la covid-19 en un contexto de escasez de agua y colapso de la infraestructura. El capítulo destaca como las comunidades procuran recuperar el control sobre la distribución del agua.

INTRODUCCIÓN

“¡El pueblo no se rinde, carajo!” fue el lema del paro cívico de Buenaventura de 2017, que paralizó la ciudad y amenazó con bloquear la mayor parte del comercio internacional de Colombia durante más de tres semanas. La decisión de salir a la calle se tomó tras varios años de espera por un mejor acceso a servicios como la salud, la educación y el agua. El impacto de una sequía en el río Escalarete, principal fuente de agua de la ciudad, catalizó la protesta, dejando al descubierto el deterioro de las infraestructuras y la falta de mantenimiento que habían dificultado el suministro de agua durante años, y provocando prolongados cortes del servicio. En el contexto del paro cívico, las demandas a los Gobiernos central y regional se centraron no sólo en la obtención de un presupuesto para nuevas infraestructuras, sino sobre todo en la aplicación de cambios profundos en la gestión municipal del agua.

Buenaventura, una palabra que alude a “buena fortuna”, es una ciudad de la costa pacífica colombiana poblada principalmente por afrocolombianos. Desde su concepción como terminal marítima a finales del siglo XIX, la importancia de su puerto en el comercio exterior del país creció rápidamente. Las primeras comunidades se asentaron junto al agua, recuperando terrenos del mar mediante la construcción de casas sobre pilotes. La ciudad se fundó en la isla del Cascajal, que sigue albergando a gran parte de la población de la ciudad, así como su centro comercial y político (Gärtner 2005). Además de estar rodeada por el mar, Buenaventura está rodeada por varios arroyos y ríos.

A mediados del siglo XX la migración desde las zonas rurales cercanas contribuyó a la rápida urbanización de la ciudad. El puerto adquirió mayor relevancia durante las décadas de 1970 y 1980 y, gestionado por la empresa estatal Puertos de Colombia, representó una importante fuente de trabajo para las comunidades. Sin embargo, tras la privatización de los puertos colombianos mediante con-

tratos de concesión a principios de la década de 1990, los sindicatos fueron abolidos y el empleo formal se volvió casi inexistente en Buenaventura (Castillo 2017). En las últimas tres décadas, actores estatales e internacionales han invertido en megaproyectos de infraestructura para ampliar la capacidad portuaria. Paralelamente, el narcotráfico se ha afianzado en el puerto y se han agudizado los enfrentamientos entre grupos armados privados y la población civil desplazada (Memoria Histórica 2015).

Buenaventura tiene una población de 432.417 personas, de las cuales el 66% está por debajo de la línea de pobreza. La esperanza de vida es de 51 años, 11 menos que el promedio nacional (Revista Semana 2017). A principios de 2020, la ciudad tenía una tasa de desempleo del 34% (Redacción Cali 2020b). Diferentes informes destacan la relación desigual y a veces conflictiva entre la ciudad y el puerto, ya que pese a su buen desempeño y las numerosas inversiones que atrae, la terminal portuaria genera una cantidad limitada de empleos, en su mayoría para trabajadores traídos de otros lugares, mientras que la ciudad sigue siendo una de las más pobres y menos desarrolladas del país (Castillo 2017, Nicholls y Sánchez-Garzoli 2011, Zeiderman 2016). Aproximadamente el 80% de la población tiene acceso al suministro de agua, pero limitado a menos de cinco horas continuas de agua al día. Muchos dependen de la recogida de agua de lluvia, y solo el 50% tiene acceso a saneamiento mejorado (Silva 2017a, Suárez 2017).

DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

A pesar del rápido crecimiento de Buenaventura, la provisión de agua siguió dependiendo de un acueducto concebido para una pequeña ciudad hasta bien entrado el siglo XX. Asimismo, los servicios de agua siguieron siendo prestados por una empresa pública departamental, Acuavalle, que se centraba principalmente en municipios y poblaciones rurales de menor tamaño. En la década de 1970 se realizaron algunas obras con financiación regional para am-

pliar el suministro de agua y actualizar la planta de tratamiento. Sin embargo, a medida que la ciudad se expandía, las infraestructuras existentes se volvieron insuficientes y las operaciones de Acuavalle empezaron a ser más criticadas. La población siguió accediendo al agua de forma intermitente, complementando sus necesidades con agua de lluvia (Hurtado 2017).

A principios de la década de 1990, el gobierno municipal, entonces dirigido por el Partido Liberal,¹ emprendió algunas obras de reparación de infraestructuras para arreglar varios tramos de la red, contratando a una empresa de ingeniería para que diseñara el llamado Plan Director de Agua y Alcantarillado. Muchas de estas obras no se completaron por falta de fondos (Suárez 2017). En 1994, la Ley 142 introdujo reformas a nivel nacional que impulsaban la neoliberalización de la prestación de servicios públicos. La Constitución de 1991 había abierto la puerta a la participación del sector privado al someter los servicios públicos a la libre competencia del mercado con base en el principio de “libertad económica.” La Ley 60, de 1993, ya había autorizado a los municipios a privatizar el suministro de agua, pero fue la Ley 142 de 1994 la que exigió a las ciudades que deseaban mantener la propiedad pública que justificaran su elección. En los casos en los que se podía “justificar” la titularidad pública, se exigía que los prestadores de servicios se organizaran como sociedades anónimas: totalmente públicas, de titularidad mixta (con un máximo del 50% de titularidad pública), o totalmente privadas (Acevedo Guerrero et al. 2015).²

Estos cambios a nivel nacional allanaron el camino para las reformas en Buenaventura. En 1996, un documento emitido por la

¹ Los dos partidos políticos tradicionales de Colombia, el Liberal y el Conservador, fueron fundados en 1849 y gobernaron el país durante todo el siglo XX, hasta el año 2002. Estas agrupaciones eran al mismo tiempo partidos de masas y coaliciones multclasistas muy laxas. Mientras los liberales impulsaban una agenda de reforma agraria, electoral y educativa, el discurso conservador giraba en torno a la defensa de la iglesia católica, el orden y la propiedad privada (Arias Trujillo 2011, Palacios 2003).

² Las ciudades más grandes (Bogotá, Medellín y Cali) resistieron la presión de la privatización, pero se corporativizaron aún más (Acevedo Guerrero et al. 2015).

máxima autoridad de planificación nacional de Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), autorizó al Estado a contratar préstamos por 17 millones de dólares para financiar el Plan Maestro de Agua y Saneamiento de la ciudad. El documento CONPES 2861 estipulaba que, para acceder a los recursos, la ciudad debía crear su propia corporación autónoma de agua (CONPES 1996). Así, en julio de 2001 el gobierno municipal creó la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB) con capital del municipio. Los miembros del sector de la construcción de la ciudad también contribuyeron con pequeñas sumas y se convirtieron en accionistas. Como la recién creada SAAB no tenía experiencia previa en el suministro de agua, el plan era externalizar el servicio mediante un contrato de concesión (H. Cárdenas 2017). Sin embargo, la licitación fue irregular ya que sólo se presentó un candidato y la selección se realizó de forma precipitada y a nivel ministerial (Redacción 2014). Al final, la recién creada empresa mixta Hidropacífico firmó un contrato de concesión de operación y mantenimiento por 20 años.

Hidropacífico estaba constituido por Conhydra, un operador de agua de la ciudad de Medellín que se especializaba en la prestación de servicios a pequeñas poblaciones, e Hidroservicios, un pequeño operador de agua de Bogotá (Redacción 2014). Según un editorial de 2002 del principal periódico nacional *El Tiempo*, las perspectivas eran muy buenas. No sólo se esperaba que el nuevo operador —que gozaba de buena reputación en el departamento de Antioquia— prestara un servicio más consistente y mejorara la calidad del agua, sino que también gestionara los nuevos recursos para ampliar y mejorar la infraestructura en cuestión de pocos años (Editorial 2002). Los fondos conseguidos para el Plan Maestro de Agua y Saneamiento garantizarían la mejora de la planta de tratamiento y la reparación de fugas a lo largo de la red.

En general, se creía que la empresa pública departamental Acuavalle era la responsable del deterioro del servicio, y se confiaba en el prestigio de los empresarios de la ciudad de Medellín,

que habían cultivado una imagen popular de buenos empresarios (Editorial 1999, Editorial 2002). También se pensaba que el sector privado encarnaba cierta disciplina y tecnocracia que evitaría las prácticas corruptas.

HIDROPACÍFICO COMO OPERADOR DE AGUA: 2002-2014

Este optimismo duró poco. Los fondos prometidos en el CONPES se desembolsaron parcialmente en 2004, y al final no fueron gestionados únicamente por Hidropacífico, sino con intervención de la entidad pública de la ciudad, SAAB. Con los años, el servicio no mejoró. Mientras las administraciones locales culpaban al operador privado del mal mantenimiento de la red, el operador culpaba al gobierno por la falta de inversión en nuevas plantas de tratamiento y en la ampliación de la red (H. Cárdenas 2017).

En 2007 el gobierno local obtuvo un préstamo para realizar mejoras en la infraestructura con el fin de solucionar las fugas de agua, garantizar la micro y macro medición, mejorar la presión del agua y proporcionar un servicio diario de 16 horas, así como mejorar la cobertura de saneamiento y abordar los problemas de inundación. A pesar del desembolso de los fondos, ninguno de estos problemas se resolvió (Comité por el Agua y por la Vida 2018). La empresa constructora contratada para realizar las obras se declaró en quiebra y los fondos se terminaron agotando (H. Cárdenas 2017).

Se abrieron investigaciones por corrupción contra funcionarios municipales y el alcalde. Y a medida que el suministro de agua en la ciudad se volvía cada vez más imprevisible, también se empezó a cuestionar la actuación del operador privado. Hidropacífico declaró que el contrato de concesión en Buenaventura no era rentable debido a las fugas y las conexiones fraudulentas. A su vez, la alcaldía argumentó que el operador no mantenía adecuadamente las redes debido a su propia mala gestión y no a la falta de ingresos (Redacción 2014).

Este ciclo de financiación estatal de obras de infraestructura que

nunca se completaron continuó durante años. También hubo desacuerdos sobre la idoneidad y adecuación de las infraestructuras. La regularidad del servicio no mejoró (Hurtado 2017). En 2011, la fiscalía general abrió investigaciones por corrupción. Los alcaldes en ejercicio entre 2004 y 2019 fueron finalmente investigados y acusados de delitos relacionados con la corrupción (H. Cárdenas 2017, Redacción Cali 2018).

También es importante mencionar que durante este período, la dinámica política en la ciudad (y en el país en general) había cambiado considerablemente, debido a la intrusión de grupos paramilitares en la política electoral (Romero y Ávila 2011). La colaboración de los políticos con los paramilitares incluía el acoso a los votantes y donaciones para la campaña electoral. Una vez elegidos, los políticos devolvían los favores mediante la apropiación de fondos y cargos públicos (Verdad Abierta 2011).

Mientras el gerente de Hidropacífico argumentaba que la empresa había “cumplido con su obligación de gestionar y mantener en buen estado las redes existentes”, añadiendo que “la empresa nunca había sido rentable”, un grupo de manifestantes se dirigió a la alcaldía y quemó sus facturas de agua (Editorial 2011). Los manifestantes se quejaban de los cortes de agua que dejaban a barrios enteros sin agua durante varios días. Mientras las comunidades pasaban semanas esperando el agua, los grandes buques de carga accedían a este elemento sin problema y lo pagaban en dólares, dejando “un mal sabor en la comunidad”, como lo dijera Andrés Santamaría, defensor del pueblo regional (Editorial 2011). Mientras tanto, el suministro a la ciudad era cada vez más complicado debido a las múltiples fugas y a la baja presión (Redacción 2012).

En 2013, una investigación federal informó de que solo el 16% de los abonados de Hidropacífico tenían servicio continuo durante al menos 15 horas al día. Durante la temporada de lluvias, el servicio se interrumpía con todavía más frecuencia (Suárez 2017). En 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público declaró que 13 años después de la firma del contrato de concesión para la operación y

mantenimiento de la red, Hidropacífico no había podido garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios en términos de continuidad y cobertura. Además de las irregularidades observadas en instituciones públicas como la SAAB, las administraciones locales y las instituciones federales de supervisión, el operador privado no había invertido en el mantenimiento (Redacción 2014).

EL PARO CÍVICO DE 2017

La posibilidad de rescindir el contrato de concesión se discutió por primera vez en 2012 (Redacción 2012). En 2014 la situación era tensa. No solo empeoraba el acceso al agua y a otros servicios esenciales, sino que la ciudad se encontraba en medio de un enfrentamiento armado con grupos paramilitares que forzaban el desplazamiento de comunidades locales y ofrecían apoyo armado a inversores privados (véase Memoria Histórica 2015, Zeiderman 2016).

Así, en julio de ese año, más de 30.000 personas salieron a las calles en una movilización masiva que terminó con una sentada en la alcaldía para exigir que el gobierno interviniera para poner fin a la violencia. También exigían una mejor inversión pública en infraestructuras de agua, salud y educación (Silva 2017a). Después de las protestas callejeras, los líderes del movimiento social viajaron a Bogotá para reunirse con el gobierno federal. El entonces presidente, Juan Manuel Santos, se puso del lado de la comunidad. Describió el sistema de agua como uno diseñado hace 80 años, con un rastro de obras inconclusas y con costosos equipos sin uso que en su mayoría han sido desmantelados, al tiempo que anunciaba que la Superintendencia federal de servicios públicos iba a auditar a Hidropacífico (Redacción 2014).

Tras una movilización de ocho días, el gobierno acordó con los líderes del movimiento crear el fondo Todos Somos PAZcífico, un fondo fiduciario de 400 millones de dólares para construir infraestructura de agua y saneamiento en Buenaventura e invertir en salud y educación (CONPES 2015). Pero poco después, los fondos

prometidos inicialmente solo para Buenaventura se repartieron entre 178 municipios de la costa del Pacífico (Arenas 2017a). Además, las promesas de auditar Hidropacífico no se cumplieron. Se habló continuamente de terminar el contrato, pero no se pudo llegar a un acuerdo con el operador. Paradójicamente, mientras sostenía que las operaciones en la ciudad le dejaban pérdidas económicas, la empresa se negaba a rescindir el contrato de forma prematura (Redacción 2014).

La tensión volvió a aumentar en 2017, desencadenada por un prolongado corte de agua en medio de una sequía que dejó a 5.000 miembros de la comunidad sin agua durante semanas (Redacción 2017c). Según el gerente de Hidropacífico, los niveles de agua disminuyeron hasta un punto que no permitió “una producción óptima de agua”. El gerente señaló que la empresa seguiría atendiendo a la ciudad con camiones cisterna (Redacción 2017a). A pesar de ello, la escasez de agua continuó y la calidad del agua empeoró.

Ante las protestas, el gobierno regional prometió más inversiones (Ramírez 2017b). El gobernador también inició conversaciones con el operador, a través de la mediación del alcalde de la ciudad, para llegar a un acuerdo sobre la finalización de la concesión antes de su fecha formal. Los directivos de Hidropacífico declararon que estaban dispuestos a dar un paso al costado si el gobierno los compensaba (Silva 2017b).

En mayo de 2017, la crisis de la ciudad no mejoraba. Así, se organizó una huelga general (Silva 2017a). Quince asociaciones comunitarias trabajaron en la movilización con el apoyo de 11 sindicatos, incluidos los que representaban a los transportistas, los maestros y todos los demás trabajadores públicos. El propósito general era obligar al gobierno nacional a declarar la “emergencia económica, social y ecológica” en Buenaventura, con un rápido desembolso de fondos a la ciudad, la vigilancia y el control ciudadano de estos fondos para la prestación de los servicios públicos (Silva 2017a). Más de 150.000 personas salieron a las calles a protestar y se bloquearon carreteras para detener el comercio nacional.

Los motivos de la huelga iban más allá del acceso a los servicios públicos y cuestionaban problemas como la desigualdad y el racismo estructural. Buenaventura es una ciudad con una población mayoritariamente afrocolombiana (88,7% según el último censo nacional). Dos tercios de la población vivía bajo el umbral de la pobreza y el 62% estaba desempleado (N. Cárdenas 2017). Históricamente, los colombianos han mapeado la jerarquía racial en las diferentes regiones del país desarrollando un discurso racializado que asocia ciertas regiones con el progreso y la “blancura”, mientras que otras regiones caracterizadas como “negras” o “indígenas” se asocian a las ideas de desorden y peligro. Ubicados principalmente en las costas del Caribe y del Pacífico, los afrodescendientes han sido históricamente marginados en términos de inversión en infraestructura, desarrollo socioeconómico y poder político (Wade 2009, 2012).

El paro cívico de Buenaventura paralizó la ciudad durante 23 días. En el acuerdo final firmado por el gobierno nacional, el comité organizador y algunos garantes internacionales, Buenaventura recibió fondos (en parte de los impuestos derivados del puerto y en parte de préstamos estatales) (Silva y Arenas 2017). Se introdujo un nuevo Plan Maestro de Agua para ampliar las tuberías y garantizar el suministro 16 horas al día sin interrupciones. También se financió la primera fase de un Plan Maestro de Saneamiento (Hurtado 2017).

El panorama político cambió tras la huelga. No sólo la población se había organizado en asambleas, sino que la clase política tradicional estaba debilitada. Con el alcalde Eliecer Arboleda en la cárcel y muchos de los políticos vinculados a los paramilitares inhabilitados legalmente para la vida pública, el camino estaba despejado para que otras fuerzas entraran en la arena electoral (Soto 2018). Con una coalición popular, independiente de los partidos políticos, uno de los líderes del paro, Víctor Hugo Vidal, fue elegido alcalde y comenzó su mandato en octubre de 2019. Tras la elección de Vidal, el comité organizador del paro cívico cortó lazos con él para man-

tener su independencia del gobierno y continuar con su labor de control ciudadano.

El contrato de operación y mantenimiento firmado con Hidropacífico finaliza en diciembre de 2021, y el gobierno local aspira a presentar un esquema institucional para prestar el servicio a partir de enero de 2022.

PANDEMIA Y PRECARIEDAD

En enero de 2020, Víctor Vidal se hizo cargo de una ciudad endeudada. A diferencia de su predecesor, Vidal creó un gabinete casi sin vínculos con los partidos políticos (Soto y Ávila 2020). Vidal también representaba una amenaza para los intereses ilegales y privados relacionados con el narcotráfico y el control del puerto, lo que creaba posibles obstáculos para hacer las cosas. Otro obstáculo provendría de un gobierno nacional de derecha recién elegido (Carranza 2020).

El plan de gobierno del alcalde Vidal incluía abrir nuevos caminos y alternativas para el suministro de agua. En lugar de pagarle a Hidropacífico para que termine anticipadamente el contrato, el gobierno local explora la posibilidad de crear una empresa pública ubicada en Buenaventura, de propiedad municipal, para que preste el servicio a partir de diciembre de 2021, cuando termine la concesión con Hidropacífico. Este proceso, que comenzó en agosto de 2020, tendrá tres fases. La primera fase, que se extendería hasta octubre de 2020, es un análisis de alternativas. La segunda fase, que se extendería hasta febrero de 2021, se dedicaría a desarrollar la constitución jurídica, técnica y financiera de la empresa de servicios públicos. Por último, la tercera fase, que se extendería hasta mediados de 2021, consistiría en preparar la utilidad para comenzar a prestar el servicio en enero de 2022 (N. Rosero, líder de la MAV, comunicación personal, 14 de agosto de 2020).

Todas estas iniciativas, sin embargo, se vieron afectadas por la llegada de la covid 19. Ante la precaria situación de pérdida masiva de empleos y la amenaza a la seguridad alimentaria, el gobierno

local tuvo que organizar la entrega de ayuda monetaria y asistencia alimentaria. Durante la primera semana de mayo de 2020, el alcalde Vidal pidió al gobierno nacional que tuviera especial consideración con Buenaventura, debido a la vulnerabilidad económica de sus habitantes.

Pero la pandemia de covid-19 también ha servido para poner de manifiesto la paradoja que caracteriza a la ciudad: el puerto tiene fondos, pero la ciudad no. El puerto de Buenaventura no paró ni un solo día durante la pandemia y siguió funcionando sin muchos cambios (Redacción 2020b). En sintonía con los sueños de una Alianza del Pacífico, que implicaría la vinculación más profunda de las economías de Colombia, Chile, México y Perú (Eder 2017), el Estado central protege la inversión pública y privada en el puerto, que a su vez deja poco para la población urbana (Comisión de la Verdad 2019).

El Instituto Nacional de Salud, por su parte, advirtió sobre la vulnerabilidad de Buenaventura frente a la covid-19, no solo por albergar un puerto, con entrada y salida de personas de la ciudad, sino por la intermitencia del servicio de agua que complica las medidas de lavado de manos (Redacción Cali 2020a). Ante los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura hídrica de la ciudad, el viceministro de Agua, José Luis Acero, argumentó que a pesar de las inversiones las mejoras se verán poco a poco y que “antes de 2024 será difícil que los habitantes de Buenaventura tengan un servicio continuo de agua y saneamiento.” Acero también explicó que a pesar de los acuerdos alcanzados por el gobierno anterior con el comité de huelga, el gobierno actual debe realizar las inversiones de acuerdo a su propio presupuesto (Espinosa 2020).

Entre las medidas federales adoptadas para hacer frente a la pandemia, algunas estaban relacionadas con el suministro de agua. Las primeras, tomadas en marzo, fueron: la reconexión del agua a los hogares cuyo servicio había sido suspendido por falta de pago; la congelación de las tarifas del agua; y la limpieza y desinfección de los lugares públicos con gran volumen de actividad. Otras me-

didadas de alcance nacional incluyeron planes de pago para los residentes de bajos ingresos que podían diferir sus facturas de servicios públicos para pagarlas en 36 cuotas sin penalización ni intereses, y para los residentes de ingresos medios que podían diferir su pago en 24 cuotas (Gobierno de Colombia 2020). Sin embargo, estas medidas no ayudaron a la mayoría de los habitantes de Buenaventura, quienes reciben agua a baja presión cada dos días durante sólo unas horas y dependen en gran medida del agua de lluvia.

La situación empeoró significativamente durante los últimos días de junio, cuando los daños en las infraestructuras provocaron un prolongado corte de agua en la ciudad. Como explicó el alcalde Vidal a la prensa: “Casi 66 metros de tubería cayeron al río y tenemos una situación muy complicada dado que el 70% del agua que se suministra a la ciudad se conduce a través de esta tubería” (Redacción 2020a). No fue, como lo describieron algunos medios nacionales, un “desastre natural”. Por el contrario, el colapso se había anticipado por la falta de mantenimiento de Hidropacífico (Arenas 2017b).

Tanto el gobierno local como Hidropacífico organizaron la distribución de agua en camiones cisterna para hacer frente a la situación, pero surgieron conflictos entre y dentro de las comunidades mientras hacían cola para recibir uno o dos baldes de agua (Yamile, habitante del barrio El Capricho, comunicación personal, 5 de julio de 2020); situación que se agravó aún más por el hecho de que en ese momento había 1.282 casos de coronavirus en la ciudad (Redacción 2020a).

El suministro se restableció finalmente, pero la ruptura debilitó otras infraestructuras frágiles. Durante el mes de agosto, los hogares de algunos barrios recibieron agua cada tres días en lugar de cada dos, lo que les obligó a recoger agua de lluvia (Alicia, residente del barrio de El Capricho, comunicación personal, 20 de agosto de 2020). Esta situación dificultó la principal medida de prevención de la covid-19, lavarse las manos cada tres horas. Así, una población que ya tenía problemas se hizo aún más vulnerable. A principios

de julio, cuando se reparó la tubería, Buenaventura tenía la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de la región del Valle del Cauca (Bravo 2020).

CONCLUSIÓN

El paro cívico de 2017 demostró ser un punto de inflexión para Buenaventura, contribuyendo a la elección de un alcalde que no proviene de la política tradicional, se compromete a hacer cumplir los acuerdos que se alcanzaron con el gobierno nacional y se propone combatir la corrupción (Duque 2020). Y aunque los gobiernos de la ciudad y del país estén regidos por partidos de derechas, el alcalde Vidal insiste en que impulsará una agenda progresista:

El gobierno nacional obviamente no está en nuestra línea ideológica, pero entiende que en este gobierno distrital hay seriedad, que es la ausencia que tenían de los últimos años... O sea, no vamos a discutir con ellos si se hace o no se hace la Ciudad Hospitalaria, eso ya está acordado. Vamos a discutir los tiempos, la forma, la ruta, pero eso ya está acordado. El gobierno nacional tiene que cumplir los acuerdos del paro, el gobierno distrital hace parte de los acuerdos del paro, el movimiento cívico está para defender los acuerdos del paro (Vidal, citado en Duque 2020).

Entre los propósitos del nuevo gobierno local está la elaboración de alternativas para la prestación del servicio de agua tras la salida de Hidropacífico en diciembre de 2021. Mientras tanto, el gobierno de Vidal pretende controlar todas las inversiones en infraestructura de agua, drenaje y saneamiento. Estos planes, sin embargo, tendrán que superar muchos obstáculos. Entre ellos, la crisis económica nacional, que puede retrasar algunas inversiones en infraestructuras. Además, el desempleo en la ciudad dificultará el pago de los servicios por parte de los hogares si no existe un sistema sólido de

subsidios. También cabe destacar que el gobierno nacional electo ha incumplido sistemáticamente algunos de los acuerdos de paz firmados en 2017 (Redacción Política 2020), lo que se suma a la situación de desempleo y contribuye al agravamiento de la violencia en la ciudad. En este contexto, es difícil para el gobierno local trabajar en algunos barrios donde hay enfrentamientos armados (Carranza 2020).

También existe una paradoja en torno al regreso del agua a manos públicas. Mientras la ciudad espera un nuevo operador público de agua en 2022, Hidropacífico tiene pocos incentivos para hacer un buen trabajo durante el tiempo que le queda, agravado por el hecho de que no ha enfrentado ninguna sanción de los reguladores nacionales y tiene un ingreso fijo por la venta de agua a la administración del puerto y a los barcos. Así, la ciudad tendrá que afrontar otro año de mal servicio de agua, a pesar de que a finales de 2020 Buenaventura tenía la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de toda Colombia (Redacción Cali 2020a).

REFERENCIAS

- Acevedo Guerrero, T., Furlong, K. y Arias, J. 2015. Complicating neoliberalization and decentralization: the non-linear experience of Colombian water supply 1909-2012. *International Journal of Water Resources Development* 32(2): 172–188.
- Alcaldía de Buenaventura. 2020. Información General. <https://www.buenaventura.gov.co/>
- Appelbaum, N. 2003. *Muddied Waters: Race, Region, and Local History in Colombia, 1846–1948*. Durham: Duke University Press.
- Arboleda, S. 2017. Buenaventura: exclusión histórica y represión estatal. Razón Pública. 29 de mayo. <https://razonpublica.com/buenaventura-exclusion-historica-y-represion-estatal/>
- Arenas, N. 2017a. Buenaventura se despide de quien se negó a ser ‘un perro mudo’. *La Silla Vacía*. 2 de julio. <https://lasillavacia.com/historia/buenaventura-se-despide-de-quien-se-nego-ser-un-perro-mudo-61568>

- Arenas, N. 2017b. En vilo las promesas en Buenaventura, a pesar del paro”. *La Silla Vacía*. 17 de mayo. <https://lasillavacia.com/historia/en-vilo-las-promesas-en-buenaventura-pesar-del-paro-60975>
- Arenas, N. 2017c. Lo que hay detrás de los retrasos del fondo para Buenaventura”. *La Silla Vacía*. 12 de setiembre. <https://lasillavacia.com/silla-pacifico/lo-que-hay-detras-de-los-retrasos-del-fondo-para-buenaventura-62509>
- Arias Trujillo, R. 2011. *Historia de Colombia contemporanea*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Bravo, N. 2020. El dilema del Alcalde de Buenaventura: usar mano dura o no. *La Silla Vacía*. 6 de julio. <https://lasillavacia.com/dilema-del-alcalde-buenaventura-usar-mano-dura-o-no-77445>
- Cárdenas, H. 2017. ¿Por qué ninguna plata alcanzó para llevar agua a Buenaventura? *El País*. 5 de marzo. <https://www.elpais.com.co/valle/por-que-ninguna-plata-alcanzo-para-llevar-agua-a-buenaventura.html>
- Cárdenas, N. 2017. ¿Y qué del empleo en Buenaventura?” *La Silla Vacía*. 29 de junio. <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/historia/y-que-del-empleo-en-buenaventura-61541>
- Carranza, D. 2020. La constante mutación de la violencia en Buenaventura. *El Espectador*. 14 de agosto. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/violencia-en-buenaventura-entrevista-al-alcalde-victor-hugo-vidal/>
- Castillo, Y. 2017. Buenaventura, un puerto sin comunidad. *La Silla Vacía*. July 18. <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/historia/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad-61764>
- Comisión de la Verdad. 2019. Buenaventura, un territorio lleno de contrastes. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/buenaventura-los-contrastes-del-puerto-pobreza>
- Comité por el Agua y por la Vida. 2018. Falta de agua en Buenaventura y bonos Carrasquilla. *Las dos orillas*. 18 de setiembre. <https://www.las2orillas.co/falta-de-agua-en-buenaventura-y-bonos-carrasquilla/>
- Consejo Nacional de Política Económica y Social, C. 1996. Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US\$ 17 millones,

- o su equivalente en otras monedas, para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de Buenaventura. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social, C. 2015. Plan todos somos pazcífico. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2005. Censo de Población y Vivienda. Bogotá: DANE.
- Duque, T. 2020. Muchos se acostumbraron a que tienen que buscar al Alcalde para favores. *La Silla Vacía*. 2 de enero. <https://lasillavacia.com/silla-pacifico/muchos-se-acostumbraron-tienen-buscar-al-alcalde-favores-75088>
- Eder, A. 2017. Alianza del Pacífico: una puerta abierta que el sector privado colombiano debe cruzar. *La Silla Vacía*. 28 de junio. <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/alianza-del-pacifico-una-puerta-abierta-que-el-sector-privado>
- Editorial. 1999. ¿Y los municipios? *Revista Dinero*. 5 de noviembre. <https://www.dinero.com/edicion-impres/negocios/recuadro/y-municipios/12447>
- Editorial. 2002. Hidropacífico dará agua al puerto. *El Tiempo*. 10 de enero. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1328958>
- Editorial. 2011. Buenaventura: 35% de la población no tiene acceso al servicio de acueducto. *Semana*. 18 de marzo. <https://www.semana.com/nacion/articulo/buenaventura-35-poblacion-no-tiene-acceso-servicio-acueducto/236977-3>
- Espinosa, J. 2020. El agua en Buenaventura, solo hasta 2024. *Caracol*. 6 de junio. https://caracol.com.co/programa/2020/06/04/6am_hoy_por_hoy/1591277565_038850.html
- Gärtner, A. 2005. Un puerto contra la voluntad del destino. In SPRB (Ed), *Buenaventura Ciudad-Puerto*. Cali: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
- Gobierno de Colombia. 2020. Acciones tomadas por el gobierno. Servicios p'ublicos. <https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-servicios-publicos.html>
- Hurtado, C. 2017. ¿Por qué no llega el agua a Buenaventura? *Las dos orillas*.

7 de marzo. <https://www.las2orillas.co/no-llega-agua-buenaventura/> Memoria Histórica. 2015. *Buenaventura: un puerto sin comunidad*. Bogotá: CNMH.

Morrison, J. 2012. Social movements in Latin America: The power of regional and national networks. En Dixon, K. y Burdick, J. (Eds.) *Comparative Perspectives on Afro-Latin America*. Gainesville: University Press of Florida.

Nicholls, K. y Sánchez-Garzoli, G. 2011. Buenaventura: Where free trade meets mass graves. *NACLA Report on the Americas*, julio-agosto.

Palacios, M. 2003. *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Ramírez, H. 2017a. Demoras en llegada de carrotanques a zonas sin agua en Buenaventura. *El País*. 28 de febrero. <https://www.elpais.com.co/valle/demoras-en-llegada-de-carrotanques-a-zonas-sin-agua-en-buenaventura.html>

Ramírez, H. 2017b. Falta de agua mantiene en crisis a Buenaventura. *El País*. 26 de febrero. <https://www.elpais.com.co/valle/falta-de-agua-mantiene-en-tesis-a-buenaventura.html>

Redacción. 2009. Por parapolítica, capturado el congresista Juan Carlos Martínez. *Semana*. 23 de abril. <https://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/por-parapolitica-capturado-congresista-juan-carlos-martinez/102349-3>

Redacción. 2012. Municipio de Buenaventura le cancelará el contrato a Hidropacífico. *El País*. 2 de julio. <https://www.elpais.com.co/valle/municipio-de-buenaventura-le-cancelara-el-contrato-a-hidropacifico.html>

Redacción. 2014. La corrupción y el desgreño tienen seco a Buenaventura. *El País*. 26 de abril. <https://www.elpais.com.co/valle/la-corrupcion-y-el-desgreno-tienen-seco-a-buenaventura.html>

Redacción. 2017a. Así sortean los habitantes de varios sectores de Buenaventura la falta de agua. *El País*. 27 de febrero. <https://www.elpais.com.co/valle/asi-sortean-los-habitantes-de-varios-sectores-de-buenaventura-la-falta-de-agua.html>

Redacción. 2017b. El escándalo de corrupción que salpica al Alcalde de

- Buenaventura. *La Silla Vacía*. 7 de abril. <https://lasillavacia.com/historia/el-escandalo-de-corrupcion-que-salpica-al-alcalde-de-buenaventura-60513>
- Redacción. 2017c. Liquidan contrato de Hidropacífico en Buenaventura por crisis de agua. *El País*. 1 de marzo. <https://www.elpais.com.co/valle/ante-la-crisis-liquidan-contrato-de-hidropacifico-en-buenaventura.html>
- Redacción. 2020a. Calamidad pública en Buenaventura: el 70 % de la población no tiene agua por colapso de tubo. *El Espectador*. 24 de junio. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-buenaventura-colapasa-un-tubo-que-deja-al-70-de-la-poblacion-sin-agua/>
- Redacción. 2020b. Puerto de Buenaventura no se ha paralizado pese a pandemia. *Diario Occidente*. 24 de agosto. <https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/puerto-de-buenaventura-no-se-ha-paralizado-pese-a-pandemia/>
- Redacción. 2020c. Todo listo para la reconexión del servicio de agua en Buenaventura. *El País*. 5 de julio. <https://www.elpais.com.co/valle/todo-listo-para-la-reconexion-del-servicio-de-agua-en-buenaventura.html>
- Redacción Cali. 2018. Buenaventura, ahora enredado por deuda de bonos para acueducto. *El Tiempo*. 12 de setiembre. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/buenaventura-ahora-enredado-por-deuda-de-bonos-carrasquilla-para-acueducto-267370>
- Redacción Cali. 2020a. Buenaventura: carrera contrarreloj contra alta tasa de covid del país. *El Tiempo*. August 18. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/coronavirus-en-buenaventura-toma-de-pruebas-y-numero-de-casos-de-covid-19-530298>
- Redacción Cali. 2020b. La mala hora de Buenaventura por los efectos de la pandemia. *El Tiempo*. 9 de julio. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/desempleo-y-contraccion-de-demanda-efectos-de-la-pandemia-en-buenaventura-515950>
- Redacción Política. 2020. Dos años del gobierno Duque: un balance crudo y crítico. *El Espectador*. 9 de setiembre. <https://www.elespectador.com/noticias/politica/dos-anos-del-gobierno-duque-un-balance-cru>

do-y-critico/

- Revista Semana. 2017. Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura. *Revista Semana*. 30 de noviembre. <https://www.semana.com/nacion/articulo/buenaventura-cifras-de-pobreza-desempleo-inseguridad/526149>
- Romero, M. y Ávila, A. 2011. *La economía de los paramilitares*. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris, Random House Mondadori S.A.
- Sánchez, K. 2020. Se nos puede salir de control: advertencia de alcalde de Buenaventura sobre la pandemia. *El País*. 7 de mayo. <https://www.elpais.com.co/valle/se-nos-puede-salir-de-control-advertencia-de-alcalde-de-buenaventura-sobre-la-pandemia.html>
- Silva, L. 2017a. Buenaventura se va a paro a pesar de las promesas. *La Silla Vacía*. 10 de mayo. <https://lasillavacia.com/historia/buenaventura-se-va-paro-pegar-de-las-promesas-60869>
- Silva, L. 2017b. Lo que se sabe del futuro de Hidropacífico (y lo que no). *La Silla Vacía*. 15 de marzo. <https://lasillavacia.com/historia/lo-que-se-sabe-del-futuro-de-hidropacifico-y-lo-que-no-60174>
- Silva, L. and Arenas, N. 2017. Más que obras, Buenaventura ganó conciencia. *La Silla Vacía*. 5 de junio. <https://lasillavacia.com/historia/mas-que-obras-buenaventura-gano-conciencia-61264>
- Soto, L. 2018. Con elección en el Fondo, el paro de Buenaventura ratifica su poder. *La Silla Vacía*. 6 de junio. <https://lasillavacia.com/silla-pacifico/con-eleccion-en-el-fondo-el-paro-de-buenaventura-ratifica-su-poder-66437>
- Soto, L. y Ávila, A. 2020. Arrancó la apuesta por cambiar la política en Buenaventura. *La Silla Vacía*. 16 de enero. <https://lasillavacia.com/arranco-apuesta-cambiar-politica-buenaventura-75210>
- Suárez, A. 2017. Acueductos contaminados por la corrupción. *El Espectador*. 11 de enero. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/acueductos-contaminados-corrupcion-articulo-674279/>
- Valenzuela, S. 2019. Víctor Vidal: el líder social que llegó a la alcaldía de Buenaventura. *Pacifista*. 5 de noviembre. <https://pacifista.tv/notas/victor-vidal-alcalde-buenaventura-entrevista-lider-social-paro-civico/>

- Verdad Abierta. 2008. La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). *Verdad Abierta*. 11 de febrero. <https://verdadabierta.com>.
- Verdad Abierta. 2011. La condena a Juan Carlos Martínez por ‘parapolítica’. *Verdad Abierta*. 8 de junio. <https://verdadabierta.com/la-condena-a-juan-carlos-martinez-por-parapolitica/>
- Víctimas, U. d. 2016. Víctimas del conflicto armado: desplazamiento de personas. En D.-. *Personas* (Ed.). Bogotá: Red Nacional de información.
- Wade, P. 2009. Defining Blackness in Colombia. *Journal de la Société des Américanistes* 95(1): 165-184.
- Wade, P. 2012. Afro-Colombian social movements. En Dixon, K. y Burdick, J. (Eds). *Comparative perspectives on Afro-Latin America*. Gainesville: University Press of Florida.
- Zeiderman, A. 2016. Submergence: Precarious Politics in Colombia’s Future Port-City. *Antipode* 48(3).

